

Comportamiento electoral, programas sociales y redes clientelares durante el predominio perredista en la Ciudad de México

Emanuel Rodríguez Domínguez¹

Trabajo preliminar. No citar sin la autorización del autor*

Introducción

La paradójica coexistencia de repertorios de acción que buscan la ampliación de la democracia, con aquellos que persiguen la permanencia en el poder de un grupo político mediante prácticas clientelares, es el principal eje de análisis del presente capítulo. Estas contradicciones permiten analizar de manera articulada el ejercicio gubernamental y la dinámica partidaria de los enclaves locales de la Ciudad de México, para ver en qué medida los vínculos entre ciudadanía, gobierno y partidos promueven al mismo tiempo prácticas políticas que buscan ampliar el ámbito de lo político y construir escenarios horizontales, para dotar de mayor autonomía individual a los habitantes de la capital; y prácticas autoritarias y clientelares que devienen en una participación regresiva a la democracia, acotada por diversos mecanismos de control electoral.

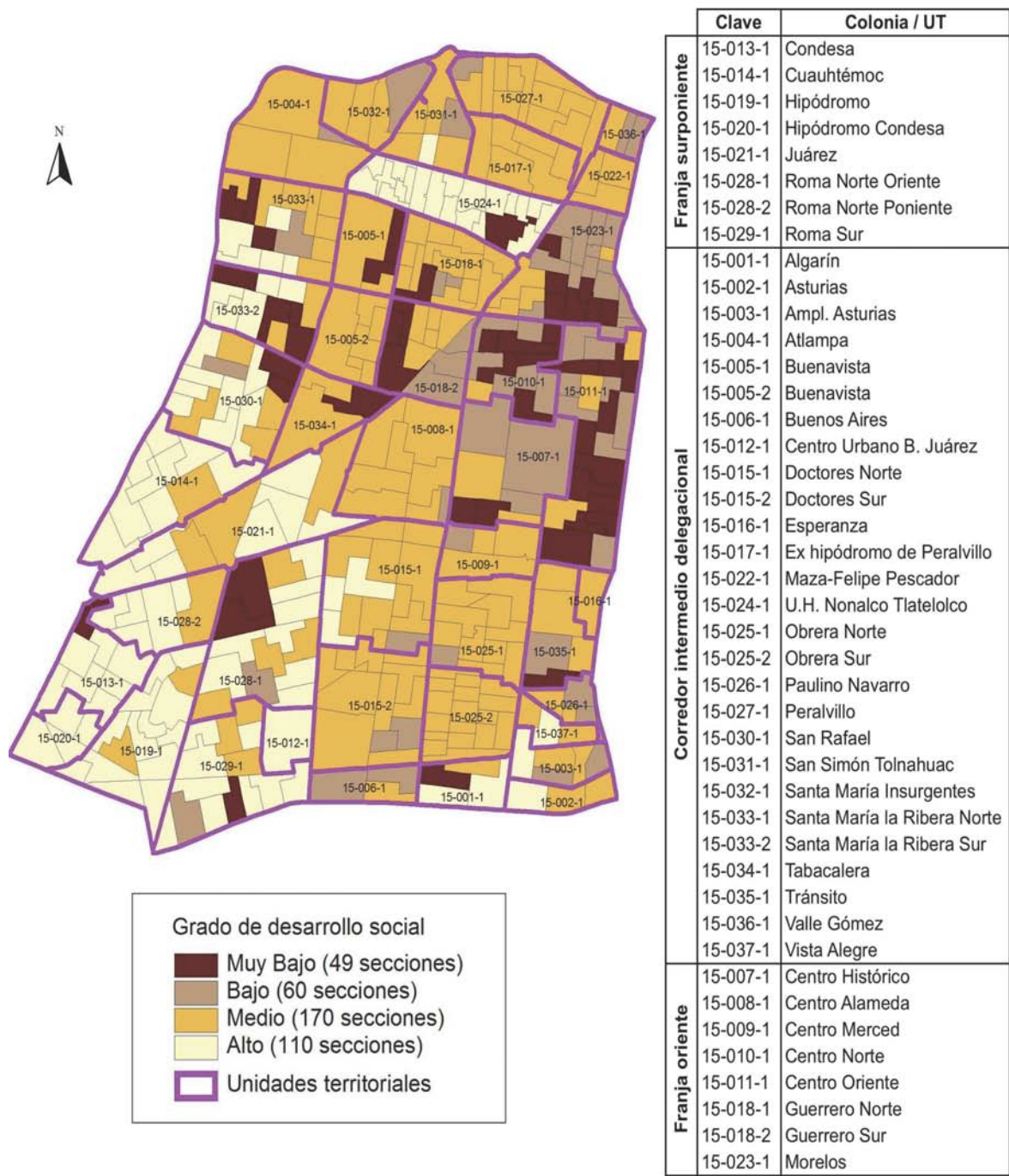
Considerando lo anterior, el presente apartado aborda los múltiples vínculos entre ciudadanía, gobierno y partidos en una delegación de la Ciudad de México durante el predominio electoral del Partido de la Revolución Democrática (2003-2012), porque desde que se restituyeron los derechos de los habitantes de la capital para elegir a sus autoridades locales, estos espacios representan el entorno ideal para analizar la disputa político-territorial entre las diversas fuerzas partidarias que coexisten en la ciudad. Para la realización del trabajo de campo se eligió la delegación Cuauhtémoc,² un lugar con una geografía de poder heterogénea, no solo por la diversidad socioeconómica de sus habitantes, sino también por la existencia de tres áreas político-culturales –la franja surponiente, el corredor central, y la franja oriente (véase Mapa 1)– en las que operan de manera diferenciada los mecanismos de contención participativa y control electoral que se han edificado en la ciudad en los últimos quince años. Cabe precisar que ninguna de las

¹ Profesor-Investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: emanuel.rodriguex@gmail.com

² La delegación Cuauhtémoc se localiza en la zona centro de la Ciudad de México, colinda al norte con las demarcaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al sur con Benito Juárez, Iztacalco y Miguel Hidalgo; al oriente con Venustiano Carranza y al poniente con Miguel Hidalgo. Se conforma de 33 colonias que, a su vez, para cuestiones político-administrativas están agrupadas en seis coordinaciones territoriales: Centro Histórico, Roma-Condesa, Tepito-Guerrero, Obrera-Doctores, Juárez-San Rafael y Santa María-Tlatelolco

tres áreas definidas es homogénea en todas estas variables. Pero, como se detalla en los siguientes apartados, el análisis histórico-estadístico de los resultados electorales del 2003 a 2012, sumado a los datos de nuestro trabajo de campo en las arenas políticas locales, muestran tendencias generales que justifican su delimitación.

Mapa 1. Delegación Cuauhtémoc. Índice de Desarrollo Social por Unidad Territorial



Fuente: Mapa elaborado en el Centro de Geografía Digital de El Colegio de México con base en información de EVALUA-DF para el año 2010.

Al analizar los usos electorales del gasto social durante las administraciones perredistas en la delegación Cuauhtémoc, pretendo evidenciar las potencialidades o límites de los programas de transferencia directa en los procesos de construcción de ciudadanía y sus impactos en los comportamientos electorales durante las elecciones locales de 2003, 2006, 2009 y 2012. En cada uno de estos procesos se aborda la acción pública de los gobiernos delegacionales desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, delimitando aquellas arenas de la política social representativas a nivel local que correlacionen un bajo índice de desarrollo social, una fuerte presencia de beneficiarios de políticas sociales, y una oscilación considerable en sus preferencias electorales en cada elección, con el objetivo de evaluar en qué medida las estrategias de desarrollo social empoderaron a los ciudadanos en la exigibilidad de sus derechos, fomentaron su desafección política o los vincularon con redes clientelares de intermediación política.

Lo sentidos que toman las prácticas políticas de los integrantes de las redes político-territoriales no están definidos en su totalidad por la membresía a los entramados clientelares, sino que también dependen de sus actitudes y expectativas con relación al poder y el gobierno. Además, la diversidad en el actuar político de las redes que han tenido presencia en la delegación se difuminó por el predominio electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante más de una década. Sin embargo, en la elección de 2015, la división del voto de izquierda por la presencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha generado una fragmentación territorial de grupos y facciones trastocando las dinámicas territoriales de los usos electorales del gasto social en el ámbito local. Vale decir que existen espacios de la capital en donde los comportamientos electorales y las prácticas políticas de sus habitantes no están constreñidos por las redes partidarias, pues éstas no son omnipresentes en la vida política de la ciudad, ya que sectores sociales como la clase media y alta muestran una integración menor o inexistente a este tipo de estructuras.

Reflexiones teóricas sobre la intermediación político-gubernamental y las redes clientelares

Durante más de una década, en las disputas políticas de la Ciudad de México asistimos a un proceso de faccionalización de la gestión gubernamental, en donde la intermediación política es comúnmente aceptada e incluso promovida por los funcionarios públicos que están vinculados con alguna estructura partidaria, pues en sus imaginarios políticos predomina la idea de que la fuerza política que controla las estructuras

gubernamentales tiene –de inicio– una enorme ventaja contra la oposición en cualquier contienda electoral (Reyna 2005). En consecuencia, la faccionalización de las políticas públicas fue desplazando gradualmente a la participación ciudadana en las arenas políticas del ámbito local, dando paso a la consolidación de redes territoriales de control político-electoral sustentadas en la intermediación de bienes materiales, obras y servicios de gestión.

Mediante las estrategias de intermediación los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente de una sociedad pueden obtener algunos beneficios en su vida inmediata, pero ello no los empodera como ciudadanos, pues sus demandas son resueltas mediante una lógica jerárquica. Más aún cuando las acciones gubernamentales enfocadas a atender la desigualdad social no están establecidas como derechos universales, la atención a la pobreza se convierte en un medio de negación de derechos que promueve la subordinación política (Dagnino, 2010; Álvarez, 2005). De esta forma, como apunta Laura Golbert, "sólo es posible recibir lo que el Estado u otras organizaciones públicas están dispuestas a otorgar [...] Se conforman así dos sujetos: el que otorga y el que recibe unidos en una relación asimétrica, casi 'tutelar'" (2010). Además, estas redistribuciones superficiales reafirman las desigualdades sociales, culturales y económicas de una sociedad, al hacer ver a las clases más desfavorecidas como inherentemente deficientes e insaciables y necesitadas de más "ayudas" por parte del Estado, al grado de llegar a generar con el paso del tiempo injusticias de reconocimiento (Fraser, 1999).

Ahora bien, al predominar una política gubernamental faccionalizada que "etiqueta" a sectores poblacionales específicos en nichos particulares de atención social según su estilo de vida, con el propósito de configurar redes de poder diferenciado entre gobernantes y gobernados (Bartra, 1996), se promueve la consolidación de emergentes semilleros de respaldo electoral que, a su vez, se constituyen como la manzana de la discordia entre quienes aspiran al poder y quienes lo sustentan. La competencia por controlar o influir políticamente en estos segmentos determina el sentido de las prácticas de intermediación política, que implementan los actores institucionales (partidarios o gubernamentales) para consolidar redes de respaldo electoral. En consecuencia, los espacios políticos del ámbito local se enmarcan en una constante disputa por las clientelas y los espacios de gestión gubernamental (Tejera, 2009).

La consolidación de las prácticas de intermediación política como un recurso del que echan mano los partidos políticos para incrementar su votación, acredita una inercia cultural y una deficiencia democrática en la dinámica política de los enclaves locales de la Ciudad

de México. En la relación entre ciudadanos, partidos y gobiernos locales, los pactos clientelares se convierten en un vínculo afectivo e intencional, que reposa en el intercambio explícito de bienes o servicios a cambio de respaldo político. A pesar de esto, el clientelismo se establece como un intercambio de bienes no comparables, distintos y diversos entre actores sociales en posiciones desiguales, pero con un denominador común: la interdependencia por la cual unos necesitan poder o prestigio, mientras otros buscan favores, servicios o un bien material. Pero siendo provechoso el trato para ambas partes, pues formalmente cada uno aporta lo que el otro requiere, las necesidades del cliente son siempre más perentorias y, por lo mismo, lo colocan en situación de subordinación (Hernández, 2009:112).

Las prácticas de intermediación política no pueden ser reducidas a un mero intercambio político entre ciudadanía y actores institucionales (Combes, 2011), ya que reflejan, en la mayoría de los casos, inequidad y una relación desigual de poder entre quienes las establecen. No obstante, la interacción personal nacida del intercambio de bienes materiales por apoyos políticos entre ciudadanos y funcionarios públicos vinculados con una facción partidaria, origina una relación social vertical en donde figuran expresiones culturales como el compadrazgo, la lealtad, la reciprocidad, y la fidelidad, las cuales están sustentadas en la confianza (Lomnitz, 1994). Además, las relaciones de intermediación política también operan en el nivel de las representaciones o *performances* políticos,³ para reforzar expresiones de reciprocidad y reconocimientos mutuos por parte de los participantes del intercambio, pues en estos actos quienes detentan el poder buscan reafirmar su posición de superioridad, mientras que los ciudadanos refuerzan su voluntad de seguir participando para recibir un beneficio individual o colectivo.

Si bien hay asimetría en cualquier pacto clientelar, los principales elementos del proceso intermediación entre los funcionarios que controlan los recursos de poder y aquellos ciudadanos que tienen una necesidad y esperan que ésta sea atendida por el poder público, son el interés mutuo por establecer la relación y sus matices culturales. En efecto, las transacciones específicas entre ciudadanos y autoridades gubernamentales están permeadas por la cultura, pues buscan estructurar valores, normas y percepciones sociales para generar prácticas, comportamientos e imaginarios políticos específicos (Tejera, 2009:258). Por ello, las relaciones de intermediación política forman parte de una serie de transacciones que, para ser efectivas, se vinculan a valores culturales como el

³ Estas acciones buscan reproducir o reafirmar significados en torno a la legitimidad política del grupo que controla la estructura de poder (Abélès, 1988).

compadrazgo, la lealtad, la reciprocidad, la fidelidad, los cuales en los hechos expresan una mezcla de poder, complicidad, conformidad e indignación entre quienes establecen la transacción.

A pesar de que la intermediación política implica un intercambio asimétrico y por ende desigual, en la mayoría de los casos suele ser imaginada por quienes la establecen como un intercambio equitativo y en condiciones de igualdad, ya que los pactos clientelares no son un mero canje de favores por votos, sino toda una forma de vida y de ver el mundo para quienes los implementan (Auyero, 2002). En efecto, los procesos de intermediación involucran tradiciones culturales, sociales y políticas que hacen posible e incluso aceptable la relación clientelar entre los involucrados en la transacción. Más aún estas acciones suelen representar las estrategias de subsistencia y las aspiraciones de movilidad social de quienes las establecen.

No obstante, al interactuar en un campo político los involucrados en una relación de intermediación disputan tanto los objetivos públicos, como el control de los recursos de poder que están en juego. Por ello, implementan múltiples estrategias para obtener el máximo provecho posible de la situación o el contexto en el que se desarrolla la acción. De ahí que las relaciones de intermediación política oscilen en múltiples sentidos e impacten de manera diferenciada las identificaciones partidarias, pues todos los involucrados en un campo político persiguen objetivos propios al intentar, de alguna u otra manera, ampliar su base de poder utilizando los recursos que tienen a su alcance. En consecuencia, en los pactos clientelares tampoco se puede minimizar la capacidad de agencia de los actores que buscan por medio de estos acuerdos obtener algún bien o servicio a cambio de apoyo político, pues como lo sostiene Gay:

El intercambio de votos por favores involucra la participación informada, calculada y extremadamente efectiva de las organizaciones populares que buscan hacer responsables a los políticos, sacando ventajas de las limitadas oportunidades que surgen de los crecientes niveles de competencia política (1997:79).

Las prácticas de intermediación política muchas veces están mediadas por actitudes pragmáticas y utilitaristas asumidas por algunos actores sociales que, en lugar de subordinar sus derechos políticos, intercambian o negocian ante el mejor postor su apoyo político-partidario. Así, los integrantes de una red de intermediación ponen en juego su titularidad ciudadana en momentos coyunturales, como es el caso de los periodos electorales, con el propósito de transformar su voto en un recurso de poder inmediato para

demandar atención gubernamental o, en casos extremos, negociar a título individual su respaldo electoral a cambio de un bien material (Corrochano 2002:144). Por lo tanto, los procesos de intermediación política, en algunos casos, funcionan como espacios de negociación ciudadana y en otros como mecanismos de subordinación participativo-electoral.

Los sentidos paradójicos expresados en la dinámica de las redes de intermediación política sintetizan, en el mismo espacio y de manera contradictoria, prácticas clientelares de índole jerárquico que degradan la condición ciudadana de los habitantes de la Ciudad de México, con negociaciones utilitarias en las que el grado de agencia es mayor para demandar o ejercer un derecho. En consecuencia, las prácticas regresivas a la democracia y las que sirven para consolidarla no son excluyentes entre sí, sino que forman parte de un *continuum* donde los actores hacen uso de unas u otras dependiendo de la situación social en la que se encuentran, los recursos que manejan y las metas individuales o colectivas que persigan.

Por último, vale decir que los procesos de intermediación política encuentran un terreno fértil en contextos donde prevalecen niveles altos de pobreza y desigualdad social, ante el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del país (Montambeault, 2011). La inclinación ciudadana por establecer este tipo de relaciones aumenta porque no existe una estructura de interlocución directa ante el poder público, que permita intervenir eficazmente en el gasto público o en las decisiones gubernamentales. Por ello, como lo establece De la Peña (1990), la intermediación política es una estrategia que implementan los ciudadanos ante la desigualdad social y la falta de canales adecuados para obtener atención gubernamental, pues sobre todo la establecen aquellos sectores sociales que solventan sus necesidades de gestión por medio de canales informales, en donde operan intermediarios de tiempo completo estructurados en redes territoriales vinculadas con alguna facción partidaria o grupo político.

Simulación participativa mediante políticas de gasto social

En el ámbito delegacional de la Ciudad de México las pugnas faccionales partidarias se han extendido a la disputa por el control de los puestos gubernamentales que apuntalan el capital político, tanto de los diversos grupos político-partidarios, como de los líderes locales más importantes. Las carteras de la administración pública más codiciada por los nuevos emprendedores políticos son las áreas de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, debido a que parte importante de la energía administrativa de las delegaciones

se dirige a la entrega de programas sociales focalizados⁴ y a su promoción mediante asambleas informativas. Estas acciones simulan ser estrategias gubernamentales para fomentar el desarrollo y participación ciudadana, pero en realidad representan mecanismos de control electoral, los cuales son fundamentales para la consolidación político-territorial de un grupo o facción.

Un caso representativo del proceso anterior aconteció en la delegación Cuauhtémoc, entidad donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó la elección a la jefatura delegacional por cuatro trienios consecutivos 2003 al 2012. Durante este período los gobiernos delegacionales perredistas (comandados por la IDN-Cuauhtémoc⁵) promovieron una serie de programas sociales de transferencia directa agrupados en el esquema "Justicia Social", entre los que destacan la pensión para adultos mayores, el apoyo económico a jefas de familia y mujeres en estado de abandono, la entrega de becas escolares y el apoyo a personas con discapacidad. Estos programas suelen ser muy modestos en recursos y alcances, por lo que difícilmente son comparables con sus contrapartes federales o estatales. Sin embargo, son un referente importante en los imaginarios políticos⁶ de la población beneficiaria debido a la proximidad que estas acciones generan entre funcionarios delegacionales, redes político-territoriales y habitantes de los entornos locales.

A nivel discursivo los programas del esquema "Justicia Social" creados por los gobiernos perredistas buscaban atender a los estratos sociales más pobres y vulnerables de la demarcación mediante transferencias monetarias o créditos que las autoridades otorgan directamente a los beneficiarios. No obstante, en los espacios de gestión local analizados durante el trabajo de campo se presentó una tensión constante entre diferentes formas de apropiación y resignificación cultural de las narrativas que se asocian a los programas sociales.⁷ En dichos espacios era común que nociones como "solidaridad con

⁴ Como lo indica su nombre, estos programas buscan focalizar la entrega de algunos beneficios o ayudas sociales a diversos sectores de la población. Además, su implementación ha desplazado paulatinamente a las políticas públicas que atendían áreas específicas bajo la lógica del desarrollo: pobreza, salud, alimentación, etcétera (Duhau, 2002).

⁵ Esta facción perredista fue creada en 1994 por René Bejarano y Dolores Padierna con el propósito de agrupar a organizaciones urbano-populares –entre las que destaca la Unión Popular Nueva Tenochtitlan–, magisteriales y ciudadanas. En su trayectoria intrapartidaria sufrió escisiones y en 20012 cambió el nombre Corriente de Izquierda Democrática (CID) por el de Izquierda Democrática Nacional (IDN) (Vivero, 2006:138-139).

⁶ Los imaginarios sociales son procesos subjetivos que devienen en un campo organizado de prácticas sociales culturalmente organizadas entre actores sociales y campos de posibilidad definidos a nivel micro y macro-social (Appadurai, 2001).

⁷ Durante el trabajo de campo se estudiaron tanto las visitas domiciliarias de los operadores de los programas sociales delegacionales con los beneficiarios, como las asambleas de participación ciudadana en las que se articularon éstos y los funcionarios públicos delegacionales.

los más vulnerables”, “fomento a la participación social, “ejercicio de derechos” y “construcción de ciudadanía”, fueran interpretadas de diversas maneras por los funcionarios públicos delegacionales, con el objetivo de subordinar y contener la participación ciudadana para construir nichos de respaldo electoral. Al respecto conviene citar el testimonio de un integrante del área de Desarrollo Social:

Hay dos formas de trabajar y hacer política en la delegación: una es aquella que se arrastra de la aplicación asistencialista y clientelar de programas sociales promovida por algunos sectores que tienen todavía mucho peso en la administración. En contraposición a esa forma, estamos los que intentamos hacer las cosas de otra manera; es decir, buscamos que las políticas sean más horizontales y participativas para poco a poco ir logrando buena presencia tanto con la gente, como en la administración delegacional.⁸

Los grupos partidarios que encabezaban la administración delegacional en Cuauhtémoc fueron paulatinamente reduciendo la participación ciudadana a la entrega y promoción de programas sociales entre los segmentos poblacionales que muestran los menores índices de desarrollo social. La atención gubernamental focalizada hacia estos sectores tiene como fin integrarlos a una dinámica de atención estatal en donde sus condiciones de vida no mejoran, sino que únicamente se atenúan (Álvarez, 2005; Fraser, 2000), lo cual generó una dependencia entre los "beneficiarios" y los intermediarios gubernamentales, pues se convirtió a los primeros en ciudadanos asistencialistas o, en palabras de Auyero (2011:16), en pacientes del Estado. Esta paradoja de la política social delegacional fue reflexionada por un ex-jefe delegacional de la siguiente manera:

Con los programas sociales hemos atendido las necesidades más apremiantes de la gente, con lo cual hemos ganado su simpatía, pero nos hace falta dar el salto a la construcción de ciudadanía, porque también es verdad que no hemos construido una ciudadanía activa. Una ciudadanía en la que la gente vaya haciéndose a la idea de que ellos tienen que apropiarse del destino y futuro de los recursos públicos de toda la ciudad. Desafortunadamente, hasta este momento nos hemos quedado en cuestiones asistenciales que algunos grupos han usado clientelaramente. Hay que decirlo, porque eso también ha pasado y es algo que hace falta corregir en los programas sociales.⁹

Las políticas sociales de los gobiernos delegacionales y sus procesos participativos no sólo se ubican en el desempeño administrativo, sino que también se expresan a través del ejercicio de múltiples prácticas políticas entre gobernantes y gobernados (Hevia, 2011;

⁸ Entrevista D9. Funcionario delegacional del área de Desarrollo Social. Marzo de 2010.

⁹ Entrevista JD1. Exjefe delegacional de Cuauhtémoc. Junio del 2010.

Ziccardi, 2004). Como se detalla a continuación, estas prácticas tienen un carácter multidireccional, ya que las elecciones de los beneficiarios podían ser tomadas a partir de una amplia gama de alternativas o situaciones sociales derivadas de un *continuum* entre una lógica igualitaria y una jerárquica (Da Matta, 2002). Por esta razón los sentidos de la participación entre los beneficiarios de una política social son diferenciados al permitir, por un lado, ampliar el ámbito de lo político para construir escenarios horizontales que dotan a los ciudadanos de mayor autonomía individual; por otro, readaptar prácticas corporativas para reforzar las redes político-territoriales de un grupo político o facción partidaria.

En Cuauhtémoc los espacios participativos delegacionales durante los gobiernos perredistas tuvieron una calendarización semestral en la que se efectúan aproximadamente 70 asambleas informativas (véase mapa 2). Estas reuniones eran promovidas por el área de Participación Ciudadana y se realizaban en lugares públicos de la demarcación (plazas, jardines, mercados, deportivos y en las inmediaciones de las iglesias). En dichos foros la dinámica de interlocución entre autoridades y ciudadanos era mínima, ya que el papel de los asistentes quedaba reducido a escuchar el discurso del jefe delegacional y, en contadas ocasiones, expresar tanto sus demandas de gestión, como sus puntos de vista sobre los servicios públicos. La mayoría de los asistentes a este tipo de reuniones eran beneficiarios de alguno de los programas sociales del esquema “Justicia Social”, destacando la presencia de personas de la tercera edad y madres de familia,¹⁰ quienes por lo regular acudían acompañadas de sus hijos. Los beneficiarios asistían a las asambleas informativas mediante el aviso directo de los promotores y verificadores del programa social. Incluso, en dichos actos, se les pasaba lista de asistencia. Aunque no por ello dejaron de acudir a estas reuniones vecinos que demandaban alguna gestión particular. La siguiente ficha de trabajo de campo sintetiza la dinámica de estas asambleas:

Después de cuarenta minutos de espera llega el Jefe Delegacional quien inicia una extensa reflexión sobre la economía general, el desempleo y el subempleo sosteniendo que “somos de izquierda y nos interesa la igualdad, así como salir a la calle y dejar el escritorio como lo prometí desde que era candidato a Jefe delegacional”. Habla ampliamente de diversos programas de gasto social y los ahorros para sufragarlos porque su propósito es que “la gente de la delegación tenga una condición digna”. Finalmente, reitera que seguirá trabajando en las calles y manteniendo los recorridos por éstas. Los asistentes se levantan. Unos se acercan buscando hablar con él y sus directores, mientras que la mayoría de

¹⁰ Según datos delegacionales los programas sociales enfocados a estos sectores representaban poco más del 80 por ciento del padrón de beneficiarios del esquema “Justicia Social” (alrededor de 24 mil). Para el año 2010 los programas Jefas de Familia y Mujeres en Estado de Abandono contaba con un total de 15,120 beneficiarios; mientras que el programa de apoyo a Adultos Mayores tenía 5,167 empadronados.

las mujeres que asistieron se apresuran hacia donde están las trabajadoras de “participación ciudadana”, quienes tienen listas de asistencia, apiñándose alrededor de ellas para firmar. Son beneficiarias de programas sociales “convocadas” para asistir y deben pasar lista al final. Algunas otras se acercan a las promotoras (que visten camisa negra con logotipo de la delegación) preguntando por algún programa mencionado y las promotoras les explican los trámites para ser beneficiarias.¹¹

En esta asamblea, y otras a las que se asistió durante el trabajo de campo, se “placea” tanto el jefe delegacional como los integrantes de su equipo; el primero, buscando ascender políticamente y catapultarse a otro puesto gubernamental o legislativo; los segundos, sus directores de área, deseaban la candidatura a la jefatura delegacional.¹² Para ello llenaban “la plaza” con los beneficiarios del esquema de “Justicia Social”, con el propósito de mostrar su capacidad de convocatoria. Además, en estos espacios los beneficiarios asimilaban el carácter jerárquico de los dispositivos habituales relacionados con la asistencia social; es decir, interiorizaban y normalizaban que si quieren seguir recibiendo los programas deben respaldar las agendas políticas o los proyectos de los agentes estatales. De ahí que guardan sus reclamos para otro momento y lugar, pues en las asambleas tenían que “soportar la espera (en silencio), y actuar no como ciudadanos con reclamos legítimos, sino como pacientes del Estado” (Auyero, 2011:22). Además, al término de estos *performances* los asistentes regularmente se aglomeraban alrededor del jefe delegacional o de sus subordinados. Ello propiciaba el imaginario de que fueron atendidos “personalmente”. Aunque, por lo regular una promotora delegacional ubicada a un costado de los principales funcionarios apuntó las demandas recibidas para convertirlas, en el mejor de los casos, en oficios que se perderían en la maraña burocrática de la administración pública local.

Por todo lo anterior las asambleas informativas de los gobiernos perredistas emulaban un *performance* mediante el cual un grupo político busca incrementar sus adhesiones partidarias y acotar el comportamiento ciudadano, con base en una “didáctica” que evidencia los términos válidos para acceder a la atención y los recursos públicos. Esto confirma que las instituciones gubernamentales son productoras y reproductoras de una cultura ciudadana, porque “instruyen” a los ciudadanos sobre cómo relacionarse con el poder, así como los objetivos y el carácter del desempeño de las instituciones estatales. En

¹¹ Trabajo de campo en asamblea ciudadana. Mayo del 2010.

¹² Las disputas intrapartidarias por las candidaturas locales reafirman la importancia política que tenía el área de Desarrollo Social delegacional durante los gobiernos perredistas, pues regularmente su director se postulaba a la candidatura por la jefatura delegacional utilizando el capital político acumulado durante tres años de gestión del gasto social y posicionamiento entre los habitantes de la demarcación mediante las asambleas informativas.

otras palabras, en las arenas de la política social se reproducía una ciudadanía con derechos mínimos o disminuidos por la adhesión y dependencia a facciones y grupos políticos; además de que se trasmitía una percepción pragmático-clientelar sobre el ejercicio de la gestión pública. Como ejemplo de lo anterior resulta relevante el siguiente testimonio recabado en el trabajo de campo:

Mira, nosotros nos hemos dado cuenta de que el ciudadano agarra todo lo que le dan, venga de cualquier partido o instancia de gobierno. Él no tiene pena y agarra todo de donde venga, pero eso para nosotros como administradores no es bueno, pues se acostumbra y si posteriormente no le das te castiga en las elecciones. También se puede dar el caso de que te empiece a exigir más [...] Estoy de acuerdo en que debemos cambiar la forma como se hace política en la delegación. Aunque, desde mi punto de vista, esto únicamente se puede hacer desde arriba y para ganar se tiene que hacer una buena estrategia de gestión de las demandas ciudadanas para sacar ventaja política. Así lo hacen todos los partidos.¹³

La dinámica de los escenarios participativos arriba descrita predominó en los espacios delegacionales donde se concentraba el mayor número de beneficiarios sociales (véase mapa 2 y mapa 3), regularmente asentados tanto en el corredor central de la delegación, como en la franja oriente.¹⁴ Por ejemplo, en colonias como Centro Norte (1,091 beneficiarios), Centro Oriente (1,060), Guerrero (2,355), Morelos (1,746) y Santa María la Ribera (2,012), se efectuaban de cuatro a seis asambleas. En estos espacios los arreglos entre ciudadanía y gobierno estuvieron mediados en su mayoría por las redes político-territoriales vinculadas con la facción perredista que controlaba la delegación. Por el contrario, en la franja surponiente de la delegación casi no se realizaron asambleas informativas, pues en esta zona residen pocos beneficiarios de los programas sociales al estar habitada principalmente por sectores de clase media-alta. De ahí que en colonias como Condesa (con 69 beneficiarios) y Cuauhtémoc (con 93) sólo se realizó una asamblea informativa. Asimismo, en lugares donde el padrón de beneficiarios es mínimo, como las colonias Hipódromo (con 38) e Hipódromo Condesa (con 10) no se efectúan este tipo de reuniones. Las escasas asambleas que se realizaban en la franja surponiente mostraron que las prácticas políticas de los habitantes de dicha zona estaban matizadas por valoraciones individuales, que no cruzan necesariamente por los canales de la

¹³ Plática con funcionario delegacional durante asamblea ciudadana realizada en febrero de 2010.

¹⁴ La mayoría de los puntos en los que se realizaron asambleas informativas coinciden con los lugares en donde los candidatos perredistas realizaron actividades proselitistas durante las campañas electorales de 2009 y 2012.

intermediación política o por la integración de redes político-territoriales vinculadas a las facciones partidarias que se disputan la delegación.

En la dinámica de las reuniones informativas del corredor Roma-Condesa fue común encontrar momentos de ruptura ya que, a diferencia de las asambleas realizadas con beneficiarios en otras zonas de la demarcación, en estos *performances* los funcionarios eran cuestionados por los asistentes. Los reclamos vecinales tenían como propósito exponer públicamente sus demandas y necesidades de gestión argumentando que: “ustedes [las autoridades] están para servir a la comunidad y proporcionarnos obras y servicios, es su obligación”; en otros casos los vecinos increparon a las autoridades indicando que: “no les venimos a pedir ningún favor, nada más venimos a exigir que se apliquen las leyes y las normas como indica la ley”.¹⁵ No obstante, la presión ejercida era poco eficaz, pues generalmente los funcionarios delegacionales esquivaron o condicionaron las exigencias de gestión a las limitaciones financieras y administrativas de los gobiernos locales. En consecuencia, las demandas ciudadanas de los habitantes de esta franja se subordinaban tanto a la lógica burocrática de las oficinas gubernamentales, al indicarles que “una vez que presenten su trámite en las instancias adecuadas, éste podrá ser resuelto”, como a la carencia de recursos en la administración delegacional, al afirmar que “no tenemos el presupuesto que habíamos solicitado y éste nos fue proporcionado hasta hace poco, por eso empezamos tarde los programas. Además, no tenemos las facultades de un municipio”.¹⁶ Las trabas burocrático-administrativas que complican una gestión gubernamental fomentan un imaginario que desalienta la participación en la esfera pública, al buscar que las deficiencias en los servicios y obras delegacionales sean resueltas por la propia ciudadanía (Redko, Rapp y Carlson, 2006).

En términos generales podemos establecer que en las asambleas informativas promovidas por los gobiernos perredistas se promovían un conjunto de prácticas político-culturales que buscan empapar a los habitantes de los principios y contenidos subyacentes a las relaciones políticas (Shore, 2010). Los significados atribuidos por los ciudadanos a sus interacciones con los funcionarios en las arenas de la política social, eran el reflejo de un espacio de subordinación y acatamiento a una lógica ciudadana jerárquica que no permite la negociación con la autoridad y mucho menos su cuestionamiento, pues su único objetivo es instaurar formas específicas de gobernabilidad (Auyero, 2011:21). Las

¹⁵ Testimonios recopilados en trabajo de campo durante las asambleas de participación ciudadana realizadas en los meses de mayo y junio del 2010.

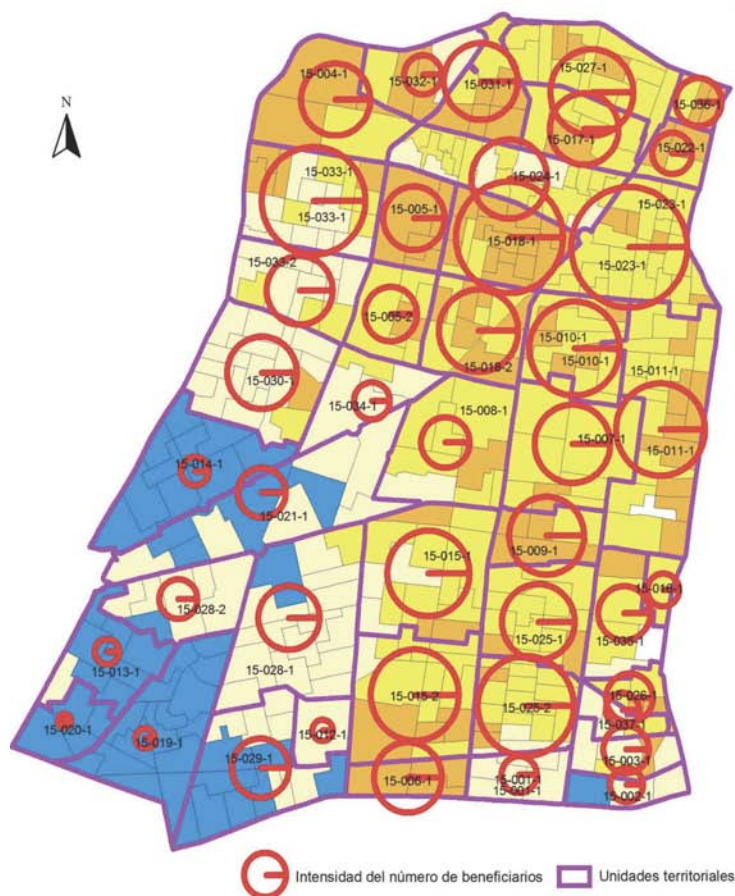
¹⁶ Testimonios recopilados en trabajo de campo durante las asambleas de participación ciudadana realizadas en los meses de mayo y junio del 2010.

particularidades de los vínculos entre gobierno y ciudadanía no provienen de una "cultura de súbdito", sino de prácticas de subordinación que configuran una forma particular de ciudadanía relacionada con lógicas de grupo y lealtades personales.

Mapa 2. Delegación Cuauhtémoc. Ruta de Asambleas Informativas.
Primer Semestre de 2010



Mapa 3. Delegación Cuauhtémoc. Comportamiento Electoral Histórico.
Jefe Delegacional 2003-2012.
Unidades Territoriales por Número de Beneficiarios de Programas Sociales



	Clave	Colonia / UT	Padrón PS
Franja surponiente	15-013-1	Condesa	69
	15-014-1	Cuauhtémoc	93
	15-019-1	Hipódromo	38
	15-020-1	Hipódromo Condesa	10
	15-021-1	Juárez	313
	15-028-1	Roma Norte Oriente	516
	15-028-2	Roma Norte Poniente	194
	15-029-1	Roma Sur	446
Corredor intermedio delegacional	15-001-1	Algarín	164
	15-002-1	Asturias	140
	15-003-1	Ampl. Asturias	281
	15-004-1	Atlapampa	656
	15-005-1	Buenavista	514
	15-005-2	Buenavista	377
	15-006-1	Buenos Aires	627
	15-012-1	Centro Urbano B. Juárez	44
	15-015-1	Doctores Norte	913
	15-015-2	Doctores Sur	1,036
	15-016-1	Esperanza	128
	15-017-1	Ex hipódromo de Peralvillo	647
	15-022-1	Maza-Felipe Pescador	211
	15-024-1	U.H. Nonalco Tlatelolco	785
	15-025-1	Obrera Norte	719
	15-025-2	Obrera Sur	1,229
	15-026-1	Paulino Navarro	297
	15-027-1	Peralvillo	929
	15-030-1	San Rafael	662
	15-031-1	San Simón Tolnahuac	744
	15-032-1	Santa María Insurgentes	187
	15-033-1	Santa María la Ribera Norte	1,415
	15-033-2	Santa María la Ribera Sur	597
	15-034-1	Tabacalera	169
	15-035-1	Tránsito	373
	15-036-1	Valle Gómez	289
	15-037-1	Vista Alegre	144
Franja oriente	15-007-1	Centro Histórico	773
	15-008-1	Centro Alameda	323
	15-009-1	Centro Merced	765
	15-010-1	Centro Norte	1,091
	15-011-1	Centro Oriente	1,060
	15-018-1	Guerrero Norte	1,506
	15-018-2	Guerrero Sur	849
	15-023-1	Morelos	1,746
Total			24,069

Cluster		Porcentaje de votos del PRI (con PVEM en 2006)	Porcentaje de votos del PAN	Porcentaje de votos del PRD (con PT y CONV en 2009 y 2012)	Porcentaje de votos de OTROS PARTIDOS	Participación electoral
1	Secciones	88	88	88	88	88
	Media	16.8	13.8	54.4	13.8	51.7
	Desv. Estándar	2.3	2.5	3.5	1.4	4.5
2	Secciones	51	51	51	51	51
	Media	16.7	39.8	30.4	13.4	54.2
	Desv. Estándar	1.4	3.5	2.8	1.5	3.2
3	Secciones	159	159	159	159	159
	Media	18.7	18.0	48.4	14.9	53.0
	Desv. Estándar	3.6	2.9	2.6	1.6	5.7
4	Secciones	89	89	89	89	89
	Media	17.0	27.0	41.5	14.2	54.9
	Desv. Estándar	1.9	3.1	2.9	1.2	3.0
Total	Secciones	387	387	387	387	387
	Media	17.6	19.1	47.0	14.3	53.4
	Desv. Estándar	3.0	9.0	8.4	1.6	4.9

Fuente: Mapa elaborado en el Centro de Geografía Digital de El Colegio de México con base en información del IEDF para las elecciones de 2003 a 2012 y de Evalúa-DF para políticas sociales delegacionales.

Ahora bien, al correlacionar la información de los lugares donde se realizaron las asambleas informativas (mapa 2), las colonias en donde se concentraban el mayor número de beneficiarios (mapa 3), las tendencias del voto histórico en la elección a jefe delegacional por sección electoral (mapa 4), y la influencia de las redes político-territoriales en las disputas faccionales de la delegación (Rodríguez, 2016), encontramos lo siguiente: las secciones electorales en donde el PRD históricamente ha obtenido más votos (*cluster* 1 y 3) se ubicaban en las colonias que concentran el mayor número de beneficiarios de los programas sociales. Asimismo, estas secciones coincidían con los lugares de la franja oriente y el corredor central delegacional, en donde existía una mayor cantidad de redes político-territoriales y grupos corporativos vinculados con las facciones partidarias. Finalmente, las colonias en las que se realizaron más asambleas informativas concuerdan tanto con los sitios en donde los candidatos perredistas concentraron sus actividades proselitistas durante las campañas electorales de 2009 y 2012, como con los lugares en donde existían más beneficiarios de los programas sociales.

Las correlaciones anteriores confirman, por un lado, que muchas de las redes político-territoriales perredistas se fueron construidas mediante el uso faccional del gasto social. Por otro, que las campañas electorales eran una extensión del posicionamiento político realizado por las facciones del PRD que controlan la dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, pues estos puestos les permitían aumentar su capital político mediante la entrega de programas sociales y la personalización política de estas acciones en las asambleas informativas delegacionales. No obstante, la correlación entre gasto social y tendencia del voto debe ser analizada con mayor profundidad, ya que depende del tipo de ciudadanía e imaginario político construido por los beneficiarios de los programas sociales en los diferentes espacios sociopolíticos de la demarcación. Como veremos a continuación, estas valoraciones están influidas por el contexto en el que se desarrollan la acción política, la intencionalidad de los actores sociales y los referentes culturales que matizan tanto sus identificaciones partidarias, como sus comportamientos político-electorales.

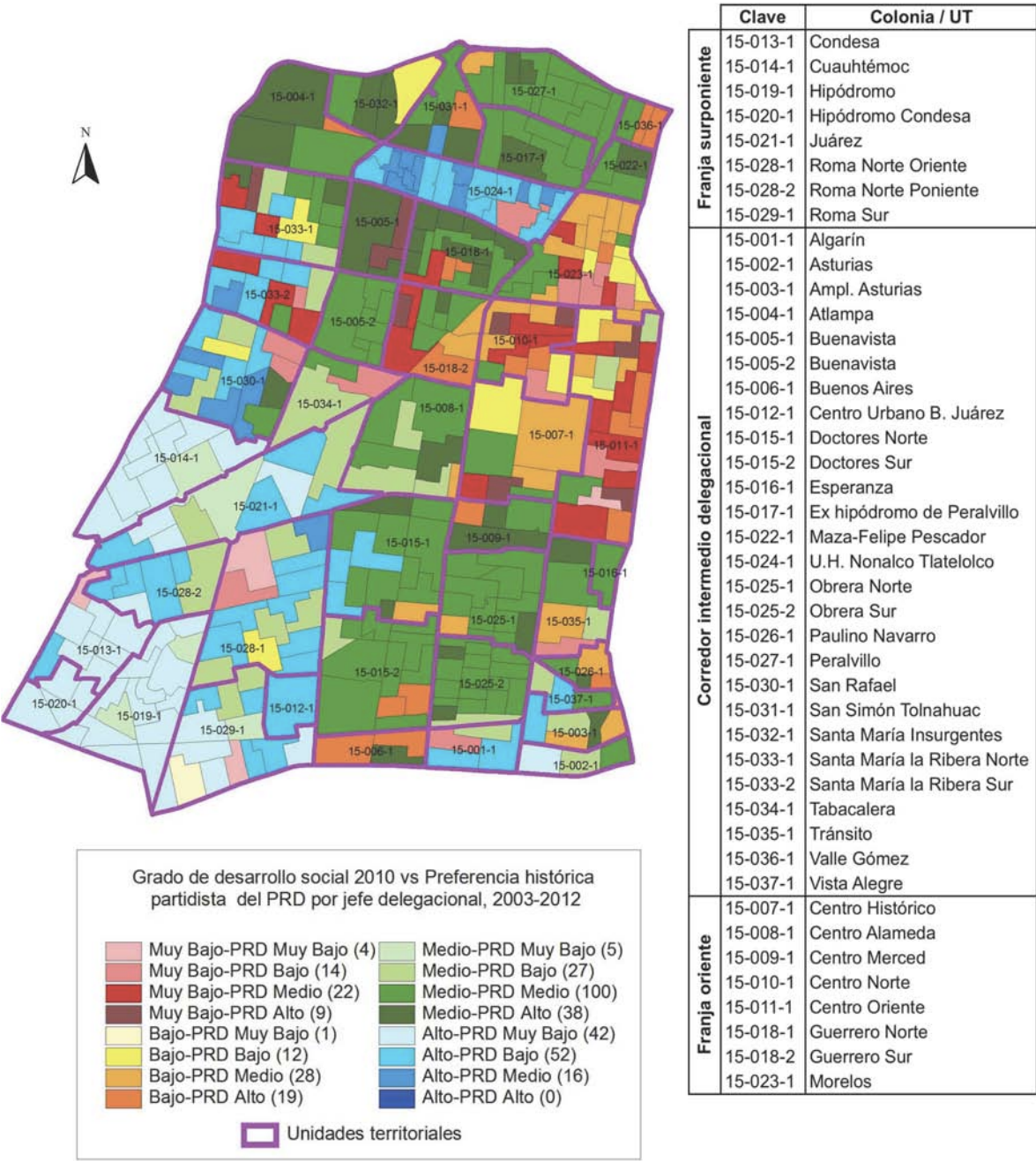
Redes político-territoriales y usos electorales del gasto social

El análisis formal del vínculo entre partidos y ciudadanos adscribe a los segundos preferencias electorales con base en una evaluación de las ventajas que los primeros les ofrecen. Este enfoque obstaculiza la comprensión de la dinámica electoral contemporánea en los enclaves locales de la Ciudad de México. En los arreglos político-partidarios de la

delegación Cuauhtémoc, durante el predominio perredista, frecuentemente las adhesiones e identificaciones políticas derivaron de la respuesta gubernamental a las demandas de redes político-territoriales vinculadas a facciones partidarias. En la mayoría de los casos, la distribución del gasto social a través de intermediarios delegacionales –a los que hemos nombrado "burócratas de calle"– era el medio por excelencia para lograr el control político-electoral de dichas redes.

La existencia de redes de control electoral basadas en el gasto social no puede explicarse sin considerar la debilidad política que tienen los sectores de la población más desfavorecidos a nivel socioeconómico para incidir en la acción pública (O'Donnell, 1999). Por esta razón, dichas redes se regularmente ubican en las zonas donde vive la población más pobre de la demarcación o la que expresa las mayores necesidades de gestión gubernamental. La correlación que puede establecerse entre pobreza y existencia de redes de control político sustenta una primera explicación de las variaciones o continuidades electorales a nivel territorial en la delegación Cuauhtémoc. En efecto, el Mapa 4 muestra que, en términos generales, las zonas con mayor desarrollo social ubicadas en la franja surponiente delegacional (en tonos azules en la imagen) y las de nivel social medio-bajo del corredor central (en colores verdes), han sido relativamente constantes en sus preferencias electorales previas a 2015, votando por el Partido Acción Nacional (PAN) en el primer caso, y refrendando su voto al PRD en el segundo; mientras que las secciones de menor desarrollo social asentadas en la franja oriente (en tonos multicolores), muestran un voto más diferenciado producto de la competencia entre el PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el control de las redes políticas y grupos corporativos característicos de esta zona.

Mapa 4. Delegación Cuauhtémoc. Comportamiento Electoral Histórico del PRD.
Jefe Delegacional 2003-2012.
Índice de Desarrollo Social por Sección Electoral



Fuente: Mapa elaborado en el Centro de Geografía Digital de El Colegio de México con base en información del IEDF para las elecciones de 2003 a 2012 y de Evalúa-DF para el índice de desarrollo social.

La regionalización anterior permite analizar la influencia de los escenarios de competencia electoral en la configuración sociocultural de la ciudadanía y los imaginarios políticos de los beneficiarios de los programas sociales para los años 2003 a 2015. En primer lugar, en la dinámica política de la delegación Cuauhtémoc se distinguen 138 secciones electorales ubicadas en una amplia zona geográfica del corredor intermedio y en parte de la colonia Guerrero (mapa 4 en tono verde fuerte), en las cuales el PRD mantuvo un histórico de votación a su favor. En estos espacios durante los gobiernos perredistas se consolidaron redes político-territoriales basadas en el gasto social que en términos formales no estaban adscritas a un partido político, sino que mantenían vínculos con los grupos que accedían o continuaban en la administración delegacional cada tres años; los cuales generalmente, ante el predominio electoral del PRD en la demarcación previo a 2015, representaban a una facción de este partido.

Las asambleas informativas realizadas en las secciones electorales donde el PRD tenían las preferencias electorales más altas se caracterizaban por la existencia de prácticas de intermediación política mediadas por lógicas de grupo, ya que no sólo eran concurridas por los beneficiarios de los programas sociales, sino que los habitantes de estas colonias que no cuentan con estos apoyos, aprovechaban los espacios participativos para tratar de contactar a los "burócratas de calle" delegacionales, con el objetivo de integrarse a las redes político-territoriales basadas en el gasto social. Al respecto conviene citar el siguiente testimonio:

Los funcionarios de la delegación siempre dicen que van a dar nuevos programas, pero nunca nos avisan cómo le tenemos que hacer para pedirlos. Nos tenemos que acercar a los líderes locales porque ellos son los que en verdad gestionan y entregan las ayudas. Si no le hacemos así no tendríamos nada, por eso siempre les digo [a las autoridades] que tienen que difundir más cómo van entregar las cosas.¹⁷

Las consideraciones de formación de redes político-territoriales mediante la intermediación prevalecían en los escenarios participativos de esta zona de la demarcación. Incluso, la administración delegacional incorporó a sus nóminas a líderes locales o de organizaciones urbano-populares denominándolos eufemísticamente como "enlaces" o "promotores" ciudadanos cuando, en realidad, eran intermediarios vecinales disfrazados

¹⁷ Testimonio recopilado en plática con ciudadano en asamblea delegacional realizada en el mes de junio de 2010.

como servidores públicos.¹⁸ Estos intermediarios tenían como propósito encauzar la demanda social a través de una gestión contenida y controlar las redes de beneficiarios de programas sociales con fines electorales. Durante los gobiernos perredistas, la faccionalización de la gestión pública y los programas de gasto social fue el medio por excelencia a través del cual se forja el ascenso de nuevos emprendedores políticos en el ámbito delegacional, los cuales buscan un mejor puesto en el organigrama interno para, con el paso del tiempo, ingresar a la pugna partidaria por las candidaturas de elección popular.

A nivel participativo, la faccionalización de las acciones gubernamentales acotaba las posibilidades de influir en las acciones de gobierno por parte de los habitantes de la demarcación, pues los escasos canales de interlocución que tienen con las autoridades siempre cruzó por el umbral de la intermediación política. Conviene matizar que, si bien las relaciones de intermediación están mediadas por lógicas jerárquicas caracterizadas por un intercambio asimétrico de bienes y servicios por apoyo político-electoral, en la mayoría de los casos suelen ser valorados por quienes las establecen como un intercambio equitativo y en condiciones de igualdad. De manera que las relaciones clientelares no son un mero canje de favores por votos, sino toda una forma de vida y de ver el mundo para quienes las implementan (Auyero 2002). Al respecto conviene citar el siguiente testimonio:

Los que asistimos a las asambleas sabemos cómo son las reglas del juego aquí en la delegación. No es que manipulen a la gente o la engañen, la gente se presta al engaño, porque sabe de los beneficios que puede recibir al estar en un programa social. Además, todos sabemos que la delegación resuelve sólo algunos problemas, pero atienden más rápido los de aquellos que representan una base estable y representativa en las votaciones.¹⁹

En las relaciones de intermediación política están involucradas tradiciones culturales, sociales y políticas; a su vez, representan las estrategias de subsistencia y aspiraciones de movilidad social de quienes las establecen. Por ello estas prácticas políticas encuentran un terreno fértil en contextos donde prevalecen niveles altos de pobreza y desigualdad (Lomnitz, 1994; Montambeault, 2011). La formación de redes políticas de carácter clientelar es resultado de la dependencia al gasto social y las necesidades de gestión básica que muestran amplios sectores que habitan la demarcación.

¹⁸ Estos singulares personajes pueden catalogarse como *actores grises* (Auyero, 2007) por su ambivalente papel en los procesos políticos.

¹⁹ Testimonio recopilado en plática con ciudadano en asamblea delegacional realizada en el mes de junio de 2010.

Este puede considerarse como uno de los incentivos más importantes por los cuales dichos sectores votaron reiteradamente por los candidatos de la facción que controlaba el gobierno delegacional.

Las relaciones clientelares fueron una repuesta estratégica para asegurar votos en espacios delimitados como resultado de la competencia partidaria y, para el caso analizado, también intrapartidaria. Además, eran utilizadas por los emprendedores políticos para incrementar su influencia y perdurar en las instituciones de gobierno. La existencia de este tipo de relaciones es resultado de la competencia electoral que impulsa a los partidos políticos a implementar mecanismos de control electoral mediante el gasto social. De ahí que sea consecuencia de la pugna por recursos escasos y no un remanente de las relaciones autoritarias.

La inclinación ciudadana por establecer relaciones de subordinación y dependencia mediante la intermediación de gasto social, era reforzada por la inexistencia de esquema de interlocución directa con las autoridades delegacionales, que les permitieran intervenir eficazmente en el gasto público o en las decisiones gubernamentales. En efecto, en las arenas de la política social de la delegación Cuauhtémoc durante los gobiernos perredistas, los mecanismos de diálogo con las autoridades delegacionales eran nulos o de muy baja incidencia, al grado que, como lo menciona un beneficiario de los programas sociales, “están reducidos a los momentos en que las autoridades necesitan apoyo político”.²⁰

Negociaciones pragmático-clientelares en zonas de oscilación electoral y disputa partidaria

Por varios años en la delegación Cuauhtémoc predominó una política de gasto social que “etiquetaba” a sectores poblacionales específicos en nichos particulares de atención social según su estilo de vida, con el propósito de configurar redes de poder diferenciado entre gobernantes y gobernados. Lo anterior promovió la consolidación de emergentes semilleros de respaldo electoral, que, a su vez, se constituyen como la manzana de la discordia entre las facciones que aspiran al poder. La competencia por controlar o influir políticamente estos segmentos sociales erosiona y limita los espacios formales de participación ciudadana, principalmente en la franja oriente de la demarcación. Las asambleas informativas realizadas en esta zona se caracterizan por enmarcar una

²⁰ Testimonio recopilado en plática con beneficiario de programa social durante asamblea de participación ciudadana realizada en junio de 2010.

constante disputa por las clientelas y los espacios de gestión local entre las facciones perredistas y algunos grupos corporativo-clientelares vinculados al PRI.

La implementación de estrategias participativas en la franja oriente de la demarcación ha sido prefigurada por la tradición corporativo-clientelar que algunos funcionarios delegacionales asignaban a esta zona. De tal forma que, entre los integrantes del área de Participación Ciudadana y Desarrollo Social delegacional, era común encontrar opiniones en donde subrayaban que “en esta zona de la demarcación aún no se han erradicado los vicios del pasado autoritario”; “es difícil combatir las prácticas de acaparamiento, pues ya están muy arraigadas en la forma de hacer política o entre la gente del lugar”; “los vecinos están acostumbrados a que se les atienda por medio de líderes”; y “los predios de la colonia están controlados por representantes que se vinculan y trabajan con el mejor postor”.²¹ Pero la dinámica político-electoral de la franja oriente no estaba acotada únicamente por la participación corporativa de las organizaciones urbano-populares y del comercio ambulante establecidos en esta zona. El surgimiento de nuevos líderes locales ante la fragmentación de dichas organizaciones, sumado al contexto de disputa partidaria que le caracteriza (secciones de la franja oriente en tonos multicolor en el mapa 4), han flexibilizado y diversificado los arreglos entre las redes de control electoral, los funcionarios delegacionales, y los grupos político-partidarios. Por ello estas redes operaron bajo una lógica pragmática, pues modificaban sus preferencias electorales dependiendo de situaciones coyunturales; es decir, cambiaban el sentido de su voto con base en los acuerdos de sus líderes con otras fuerzas políticas o los representantes del gobierno delegacional.

En los espacios participativos de la franja oriente delegacional se divisan algunas arenas políticas en donde las redes de control electoral tuvieron un campo de acción más amplio para negociar la gestión o los apoyos que recibían sus integrantes, pues existía un abanico más amplio de intermediarios ante la emergencia y aparición de otros grupos de poder vinculados al PRI o a facciones del PRD opositoras a IDN-Cuauhtémoc. La posibilidad de negociar pragmáticamente el respaldo político de sus redes hacia diversas facciones o grupos partidarios hizo que los líderes locales, tanto de las organizaciones urbano-populares, como de asociaciones del comercio ambulante, incorporaran en sus imaginarios políticos la noción de la exigencia de gestión para sus agremiados. Esto imprimió una dinámica diferente a las asambleas informativas realizadas en esta franja de

²¹ Testimonios recopilados en pláticas con funcionarios delegacionales durante las asambleas de participación ciudadana realizadas en los meses de mayo y junio del 2010.

la delegación, pues en estos foros algunos líderes presionaban directamente tanto a los "burócratas de calle", como a los funcionarios delegacionales, con el propósito de obtener una mayor cantidad de beneficios para sus redes. Al respecto conviene citar la demanda de unos de estos líderes en un evento organizado por el área de Participación Ciudadana delegacional:

Al finalizar la asamblea en donde se entregaron los programas sociales. Un grupo de aproximadamente 40 personas rodea a los promotores de la delegación y empieza a increpar a los principales subdirectores del área de Desarrollo Social. Les exigen más "ayudas sociales de todo tipo para la colonia", pues dicen que "no han sido considerados todos los vecinos". En eso una persona, que al parecer es el dirigente del grupo, grita a los funcionarios "aquí no van a poder controlarnos, porque siempre nos piden que traigamos a nuestra gente a sus eventos y la traemos. Por eso la tienen que atender y darle su ayuda, y no digan que andamos acaparando las cosas, porque más bien nada más venimos por lo que nos toca por andarlos apoyando".²²

En los lugares de la delegación en donde había una mayor competencia faccional por obtener el respaldo de las redes de control electoral emergieron actores grupales (organizaciones urbano-populares, de comercio ambulante, y líderes locales), que reflejaban una participación informada, calculada y, en algunos casos, efectiva, los cuales negociaban su respaldo político al mejor postor dependiendo de la coyuntura electoral para obtener gestiones y acceso a los recursos del gasto social. Esto confirmó que muchas de las redes políticas de la franja oriente de la demarcación tienen una lógica de funcionamiento desvinculada de las filias y fobias partidario-ideológicas de sus integrantes, pues su respaldo electoral respondía tanto a los proyectos y agendas particulares de sus dirigentes, como a los acuerdos que éstos establecían con las diversas facciones partidarias.

El escenario anterior no sólo flexibilizó los arreglos entre las estructuras corporativo-clientelares y las facciones partidario-gubernamentales, sino que también sirvió para que los integrantes de las redes reconfiguraran sus imaginarios políticos, al evaluar el desempeño delegacional en relación con los servicios y gestiones que obtenían a nivel individual. En términos formales los beneficiarios de los programas sociales formaban parte de las redes de control-electoral basadas en el gasto social, pero al mismo tiempo perseguían objetivos propios al intentar, de alguna u otra manera, ampliar su base de poder utilizando los recursos que tenían a su alcance. De esta forma, algunos habitantes de la

²² Notas de campo de asamblea informativa en donde se entregaron programas sociales realizada en febrero de 2010.

delegación pusieron en juego su titularidad ciudadana en los espacios participativos, transformándola en un recurso inmediato para demandar y exigir una mejor atención gubernamental o, en casos extremos, negociar a título individual su respaldo político a los actores institucionales en momentos coyunturales, tal es el caso de los periodos electorales (Corrochano 2002:144).

En efecto, algunos de los asistentes a las asambleas de participación ciudadana realizadas en la franja oriente entablan negociaciones utilitaristas definidas bajo una lógica de estructuración individualista-igualitaria, que no estaba constreñida por algún operador político o grupo clientelar. Por medio de estas prácticas político-culturales, los ciudadanos procuraban negociar o intercambiar la atención gubernamental por apoyo de manera directa con los funcionarios públicos o los burócratas delegacionales, sin que esto les impidiera buscar a otros grupos político para cabildear algún otro recurso, pues su intención era sacar ventaja y obtener mayores beneficios materiales y económicos de las oportunidades que surgen ante los crecientes niveles de competencia política en la zona. Lo cual se expresa en el siguiente testimonio:

La gente no es tonta en esta colonia, ya hemos aprendido que, aunque tengamos los beneficios de los programas sociales, la forma de reclamarles a los políticos cuando andan fallando es ir a buscar a otro líder y ver qué nos ofrece para votar por su partido. Por eso [en las pasadas elecciones] no ganaron en esta colonia, porque no atendieron nuestras demandas y ya no vamos a perder el tiempo en ir a reclamar y meter oficios a la delegación, para esperar y al final no nos resuelvan nada. La cosa es fácil, ellos [las autoridades delegacionales] saben que si nos cumplen, nosotros los apoyamos, sino nos vamos con otro, así hasta en una de esas agarramos los apoyos de todos lados.²³

Este testimonio visibilizó la emergencia de nuevos actores en los arreglos políticos delegacionales: los escapistas políticos, quienes se caracterizaban por establecer relaciones políticas en las cuales era difícil saber quién engaña a quién con el fin de sacar una ventaja oportunista de la situación. Estos nuevos actores principalmente se manifestaron en 81 secciones electorales, en donde previo al 2015 existía una fuerte disputa partidaria entre el PRI y el PRD (en tonos multicolores en el mapa 4), ubicadas en las colonias Morelos, Centro y Guerrero. El comportamiento de los escapistas políticos visibilizó un mayor grado de agencia ciudadana en las arenas de la política social, pero ello no significó que este tipo de actitudes sirvieran de base para democratizar las políticas

²³ Testimonio recopilado en plática con ciudadano en reunión vecinal realizada en marzo de 2010.

sociales, la gestión pública o los espacios participativos, pues entre estos actores prevalecían formas de organización individualizadas y fragmentadas que no llegaron a consolidar proyectos colectivos.

Los beneficiarios de los programas sociales –que fungían como escapistas políticos– estaban, en menor o mayor medida, empoderados; pero no en términos positivos, pues seguían operando bajo esquemas jerárquicos en donde ponían en juego su titularidad ciudadana para obtener un bien económico a cambio de apoyo político, al grado que desarrollaban una serie de habilidades que les permitían insertarse en diversos nichos de la política –gestión delegacional, estructuras partidarias y comités ciudadanos–, sin importar que reprodujeran lógicas clientelares o corporativas. Lo interesante de un proceso como el anterior, es visualizar que las prácticas regresivas a la democracia y las que dotan de mayor autonomía individual a los ciudadanos no son excluyentes entre sí, sino que forman parte de un *continuum* donde los actores hacen uso de unas u otras, dependiendo de la situación social en la que se encuentran, los recursos que manejan y las metas individuales y colectivas que persigan.

Fragmentación de las redes clientelares ante la emergencia de nuevas opciones partidarias

Previo a las elecciones de 2015 la eficacia política de los mecanismos de simulación participativa y control electoral basados en el uso electoral del gasto social comenzaron a ir en picada en la delegación Cuauhtémoc, pues en algunos casos los apoyos empezaban a ser percibidos por los habitantes de la demarcación como un derecho social (Canto y Martínez, 2013:123), reduciendo el efecto político que tenían en sus inicios hace más de una década, cuando eran asumidos como parte de un acuerdo entre gobernantes y gobernados para respaldar la agenda de un grupo o facción particular. Esto preocupó a los integrantes de la IDN-Cuauhtémoc, tal y como lo refleja la opinión de uno de sus principales representantes, quien consideraba que "la curva electoral de los programas de gasto social ha llegado a su máximo rendimiento, incluso creemos que está en picada y muchos de los beneficiarios ya votan por quién quieren".²⁴

Al paulatino debilitamiento de los mecanismos de simulación participativa y control electoral trastocó el predominio electoral de la IDN-Cuauhtémoc, se sumó la aparición de nuevos actores en las arenas políticas del ámbito local, producto de la formalización del

²⁴ Entrevista con integrante de IDN-Cuauhtémoc. Mayo de 2011.

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como partido político.²⁵ Esta nueva opción partidaria, por un lado, reagrupó a los principales líderes y redes políticas de izquierda que fueron excluidos de los acuerdos faccionales ante el predominio electoral de la IDN-Cuauhtémoc en la demarcación. Por otro, fragmentó tanto a los nichos de votantes identificados con la izquierda, como a los líderes de las redes político-territoriales vinculadas a movimientos urbano-populares, grupos comercio ambulante y organizaciones vecinales que históricamente, en parte por afinidad ideológica, respaldaban la agenda social perredista.

Amparados ahora bajo las siglas de MORENA, los principales líderes ex perredistas de la delegación, exhibirían mediáticamente los malos resultados de los últimos gobiernos del PRD.²⁶ Además de sacar provecho de los escándalos de nepotismo y corrupción que aquejaban al grupo de IDN-Cuauhtémoc. Estas acciones apuntalaron la posición crítica de los habitantes de la demarcación ante el desgaste político de los sellos de gobierno perredistas de los últimos años, caracterizados por la poca transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, la falta de atención a las problemáticas urbanas, la manipulación programas sociales con fines electorales y el uso político de las estructuras delegacionales por parte de los principales líderes de dicha facción.

Otro momento que marcó la debacle perredista en los arreglos políticos delegacionales fue el reacomodo faccional durante las elecciones internas del Consejo Estatal del PRD-DF, celebradas en septiembre de 2014. Este proceso reflejaba la fragmentación que imperaba en las facciones perredistas, pues en la mayoría de las demarcaciones los puestos para acceder al consejo estatal eran disputados por al menos ocho formulas diferentes. El trabajo de campo realizado durante las campañas electorales de 2015 confirmó que las divisiones al interior de la IDN-Cuauhtémoc nunca se superaron, pues cada uno de los candidatos perredistas hicieron proselitismo por separado, rompiendo con los tradicionales performances de unidad en los que esta facción utilizaba toda la

²⁵ Morena surgió como un movimiento social que respaldaría las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2012. Posterior a estos comicios fue la plataforma de AMLO para sustentar la creación de un nuevo partido político en las elecciones de 2015, el cual en teoría ampliaría el espectro ideológico de las estructuras partidarias de izquierda, ante la crisis interna que afectaba al PRD por su respaldo al gobierno federal priista mediante la firma del llamado "Pacto por México".

²⁶ Según la evaluación realizada por el portal: www.piensoluegovoto.mx, la mayoría de las delegaciones que experimentaron alternancia en las elecciones de 2015 tuvieron una deficiente atención gubernamental hacia la ciudadanía. Particularmente, la administración perredista de la Cuauhtémoc del 2012-2015 obtuvo un índice de gestión que iba de regular a deficiente, lo que promovió una posición crítica de los habitantes de la demarcación hacia los sellos de gobierno de IDN-Cuauhtémoc.

infraestructura de gobierno para convocar a los beneficiarios de los programas sociales y promover a sus candidatos.

La debacle perredista en Cuauhtémoc no únicamente se puede explicar sobre la base del desgaste de los gobiernos perredistas producto de sus malos resultados al frente de la demarcación en los últimos años. Ni tampoco se puede asignar todo el peso a que los habitantes de la delegación tuvieron otra opción partidaria que potenció un cambio en sus comportamientos electorales, pues eso sería soslayar el peso político de las redes territoriales que los propios perredistas fueron construyendo con el paso de los años para mantener su predominio a nivel local. La oscilación partidaria en la identificación de los líderes y sus redes como factor del fracaso electoral de los perredistas fue reflexionada de la siguiente manera por uno de los coordinadores de campaña: “con la división que generó la elección interna muchos líderes se quedaron con Monreal [candidato a jefe delegacional de MORENA], por eso ganó hasta en lugares donde no tenía presencia”.²⁷ Finalmente, los resultados electorales del 2015 confirmaron la crisis de la IDN-Cuauhtémoc, pues la votación hacia sus candidatos disminuyó drásticamente, cediendo el primero lugar de las preferencias electorales a los candidatos de MORENA.

Bibliografía

- Abélès, Marc, (1988) "Modern Political Ritual: Ethnography of an Inauguration and Pilgrimage by President Mitterrand", en *Current Anthropology*. Vol. 29, núm. 3, junio.
- Álvarez, Sonia, (2005) "Los discursos minimistas sobre las necesidades básicas y los umbrales de ciudadanía como reproductores de la pobreza", en Sonia Álvarez (comp.), *Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras, discursos y actores*. Buenos Aires, CLACSO.
- Appadurai, Arjun, (2001) *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*. Buenos Aires, Trilce, FCE.
- Auyero, Javier, (2002) "Clientelismo político en Argentina: doble vida y negación colectiva", en *Perfiles Latinoamericanos*. Núm. 20.
- Auyero, Javier, (2011) "Patients of the State: an ethnographic account of Poor people's waiting", en *Latin American Research Review*. Vol. 46, núm. 1.
- Bartra, Roger, (1996) *Las redes imaginarias del poder político*. México, Océano.
- Canto, Manuel y Arcelia Martínez, (2013) *Quince años de política social en el Distrito Federal Balance y propuestas para su fortalecimiento*. México, Evalúa-DF.
- Combes, Hélène, (2011) "¿Dónde estamos con el estudio del clientelismo?", en *Desacatos*. Núm. 36, mayo-agosto.

²⁷ Entrevista con coordinador de campaña PRD. Junio 2015.

- Corrochano, David, (2002) "El clientelismo posmoderno", en *Perfiles Latinoamericanos*. Núm. 20.
- Da Matta, Roberto, (2002) *Carnavales, malandros y héroes*. México, FCE.
- Dagnino, Evelina, (2010) "La construcción democrática en Brasil: la participación de la sociedad civil y sus dilemas", en *Vanguardia*. Núm. 36, julio-septiembre.
- De la Peña, Guillermo, (1990) "La Cultura Política entre los Sectores Populares de Guadalajara", en *Nueva Antropología*. Vol. XI, núm. 38.
- Duhau, Emilio, (2002) "Políticas sociales, Ciudadanía y Descentralización", en Marco Calderón, Willem Assies, Ton Salman, (eds.), *Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina*. México, El Colegio de Michoacán/IFE.
- Fraser, Nancy, (2000) "¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era «postsocialista»", en *New Left Review*. Núm. 0.
- Gay, Robert, (1997) "Entre el clientelismo y el universalismo", en Javier Auyero (comp.), *¿Favores por votos? Estudios sobre el clientelismo político contemporáneo*. Buenos Aires, Losada.
- Golbert, Laura, (2010) *De la sociedad de beneficencia a los derechos sociales*. Argentina, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- Hernández, Edgar, (2009) *Los usos políticos de la pobreza. Política social y clientelismo electoral en la alternancia*. México, El Colegio Mexiquense.
- Hevia, Felipe, (2011) *Poder y ciudadanía en el combate a la pobreza. El caso de Progres/Oportunidades de México*. Berlín, RISC.
- Lomnitz, Larissa, (1994) *Redes sociales, cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana*. México, FLACSO, Miguel Ángel Porrúa.
- Montambeault, Françoise, (2011) "Overcoming Clientelism Through Local Participatory Institutions in Mexico?", en *Latin American Politics and Society*. Vol. 53, núm. 1.
- O'Donnell, Guillermo, (1999) "Pobreza y desigualdad en América Latina: algunas reflexiones políticas", en Víctor E. Tokman y Guillermo A. O'Donnell (coords.) *Pobreza y desigualdad en América Latina: temas y nuevos desafíos*. Buenos Aires, Paidós.
- Redko, C., R. Rapp, y R. Carlson, (2006) "Waiting Time as a Barrier to Treatment Entry: Perceptions of Substance Abusers", en *Journal of Drug Issues*. Núm.22.
- Reyna, Roberto, (2005) "El avance de las prácticas clientelares en una Argentina empobrecida. La mutilación de la dimensión ciudadana" en *Desafíos Urbanos*. Núm. 38.
- Tejera, Héctor, (2009) "Prácticas políticas, imaginarios y ciudadanía: las disonancias entre cultura y democracia en la ciudad de México" en *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 72, núm. 2.
- Vivero, Igor (2008), *Desafiando al sistema la izquierda política en México: evolución organizativa, ideológica y electoral del Partido de la Revolución Democrática (1989-2005)*. México, UAEM, Miguel Ángel Porrúa.
- Ziccardi, Alicia, (2004), *Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local*. México, IIS-UNAM, COMECOS.